



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

SENTENCIA DEFINITIVA

CERTIFICACIÓN: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 108 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se hace del conocimiento de las partes que a partir del día **ocho de enero de dos mil diecinueve**, la Licenciada **Juana Larra de Luna Lomelí**, funge como Secretaria General de Acuerdos de esta Sala.- Conste.

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
NÚMERO: *

ACTOR: ***

AUTORIDAD DEMANDADA: "PROACTIVA MEDIO AMBIENTE CAASA", S.A. DE C.V.

TERCERA INTERESADA: COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

Aguascalientes, Aguascalientes, a dieciocho de enero de dos mil diecinueve.

VISTOS, para resolver, los autos del juicio de nulidad número * y:

RESULTANDOS:

I. Mediante escrito presentado el *dieciocho de octubre de dos mil diecisiete* en la Oficialía de Partes del Poder Judicial del Estado, remitido a esta Sala al día hábil siguiente, *** demandó de la concesionaria "PROACTIVA MEDIO AMBIENTE CAASA", S.A. de C.V., la nulidad del acto administrativo que precisó en los siguientes términos.

"Los actos administrativos cuya nulidad lisa y llana se demanda, son los siguientes:

La determinación a pagar por concepto de la prestación de servicio de agua potable y alcantarillado que asciende a la cantidad de \$14,386.00 (CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) establecidos a mi cargo mediante recibo número 70767768".

Asimismo, fueron ofertadas las pruebas que se consideraron suficientes a fin de poder acreditar la acción de

nulidad planteada.

II. Mediante proveído de fecha *veintitrés de octubre de dos mil diecisiete*, se admitió a trámite la demanda, se recibieron las pruebas ofrecidas y se ordenó emplazar a la concesionaria demandada y se llamó como tercera interesada Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes [CCAPAMA].

III. Por autos de fecha *veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y seis de junio de dos mil dieciocho*, fueron admitidas las contestaciones de demanda realizadas por la tercera llamada a juicio y la Concesionaria demandada, respectivamente, admitiéndose las pruebas ofrecidas por estas y ordenando correr traslado a la parte actora para que formulara ampliación a la demanda.

IV. Según proveído de fecha *nueve de octubre de dos mil dieciocho*, se declaró por perdido el derecho de la parte actora para formular ampliación de demanda, y fue señalada fecha de audiencia de juicio.

V. En la audiencia de juicio celebrada el *catorce de noviembre de dos mil dieciocho*, fueron desahogadas las pruebas admitidas a las partes en el juicio, se abrió y agotó el periodo de alegatos, para concluir con la citación del asunto para sentencia definitiva, ante lo cual hoy se dicta bajo los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S :

PRIMERO. Esta Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, es competente para conocer y resolver del presente juicio, conforme a los artículos 51, segundo párrafo, y 52, último párrafo, de la Constitución Local; 33 A, y 33 F, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; 1, primer párrafo, y 2, fracción I, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado, toda



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

vez que se impugna una resolución administrativa emitida por la concesionaria de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado o saneamiento y su reuso en el Municipio de Aguascalientes, actuando como autoridad.

SEGUNDO. La existencia del acto administrativo impugnado, se acredita con el recibo número **70767768** emitido por la concesionaria "Proactiva Medio Ambiente CAASA", S.A. de C.V., el catorce de septiembre de dos mil diecisiete, visible a foja catorce de los autos.

Resolución en la que se determina y exige el pago de \$14,386.00 (CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), por 09 meses de adeudo del servicio de agua potable que se suministra en el bien inmueble ubicado en la calle ***, de esta ciudad de Aguascalientes, registrado con cuenta ***, siendo el último mes facturado agosto de dos mil diecisiete (M-08-2017).

Probanza que al provenir de las partes y sin que exista objeción alguna, merece valor probatorio pleno, de conformidad con lo previsto en los artículos 335, 341 y 352 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, de aplicación supletoria a la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado, según su numeral 47.

TERCERO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA.

La concesionaria demandada afirma que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 26 fracción II, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado, toda vez que esta Sala Administrativa es incompetente para conocer del presente asunto, esto dice: a) porque el recibo de pago impugnado no lo realiza en funciones de autoridad, y b) porque la naturaleza de la controversia no es administrativa ni fiscal, sino mercantil.

Refiere que el recibo de pago no lo emite en

funciones de autoridad, porque si bien es prestador del servicio público de agua potable en virtud de la concesión que le fue otorgada por el Municipio de Aguascalientes, lo cierto es que la relación jurídica que tiene con el usuario deriva de una relación contractual — contrato de suministro —, por lo que su relación es de coordinación y no de supra a subordinación, razón por la que no se encuentra actuando en funciones de autoridad.

Bajo esa premisa, refiere que el requerimiento de pago no es un acto de autoridad, dado que no proviene de una relación de supra a subordinación, ni se emite de manera unilateral por parte de la concesionaria, sino que tiene como base el incumplimiento a la obligación de pago derivada del contrato de suministro que celebró con el usuario, en una relación de coordinación.

Como sustento de su afirmación, invoca la tesis de jurisprudencia número P./J. 92/2001, de la novena época, con número de registro: 189353, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro indica: "AGUA POTABLE. CUANDO EL ESTADO PRESTA EL SERVICIO MEDIANTE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE ADHESIÓN, LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE LAS PARTES NO CORRESPONDE A LA DE SUPRA A SUBORDINACIÓN QUE EXISTE ENTRE UNA AUTORIDAD Y UN GOBERNADO, SINO A UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN VOLUNTARIA ENTRE EL PRESTADOR DEL SERVICIO Y EL PARTICULAR."

Agrega que conforme a lo previsto en los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, la naturaleza de la controversia derivada del suministro de agua potable no es administrativa ni fiscal, sino mercantil, por lo que cualquier controversia suscitada entre las partes derivadas de ese tipo de actos deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, de conformidad con el numeral 104, fracción II, constitucional.



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

Como sustento de su afirmación, invoca las siguientes tesis aisladas 2a. XLII/2015 (10a.) — con número de registro: 2009790— y 2a. CIX/2013 (10a.) — con número de registro: 2005149—, ambas de la décima época, sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al rubro indican respectivamente:

“COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LA NEGATIVA A DEVOLVER CANTIDADES PAGADAS CON MOTIVO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)].”

“CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES RELACIONADAS CON ÉSTE SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL.”

Esta Sala Administrativa resolvió en pleno, mediante interlocutoria de fecha *ocho de enero de dos mil dieciocho -fojas 102 a 112 de autos-*, que no se actualizan las citadas causales de improcedencia, por lo que ya fueron motivo de decisión de este órgano jurisdiccional y por tanto existe cosa juzgada entorno a ello.

En efecto, por virtud de la institución de la cosa juzgada, los temas definidos por un órgano jurisdiccional en una resolución contra la que no procede medio de defensa ordinario alguno no son susceptibles de modificarse, en aras de salvaguardar la seguridad jurídica.

En la especie, el recurso de reclamación fue interpuesto contra el auto de admisión de demanda, en tal medio de defensa esta Sala definió en Pleno, que no se configuraban los motivos de improcedencia expuestos por la concesionaria demandada, de lo que se sigue, que tal determinación constituye cosa juzgada y, por ende, las invocadas causales ya fueron examinadas.

En la inteligencia de que no impide llegar a esta conclusión la circunstancia de que los argumentos por los que la demandada concluya se actualizan las causales de improcedencia no sean exactamente iguales, pues mientras exista identidad temática prevalece el principio de cosa juzgada.

CUARTO. En virtud de que no se actualiza ninguna de las causales de improcedencia invocadas por la demandada, ni esta Sala advierte que se actualice alguna de oficio, lo que procede es estudiar los conceptos de nulidad que hace valer la accionante, los que por economía procesal no se transcriben, aunado a que no es un requisito formal de las sentencias.

Del mismo modo, se tienen por reproducidas en obvio de repeticiones innecesarias, las defensas opuestas por la demandada, sin que puedan ser tomados en cuenta los motivos y fundamentos legales para la emisión del acto impugnado que no hayan sido invocados en éste, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado.

QUINTO. ESTUDIO DE LO CONCEPTOS DE NULIDAD.

A firma la parte actora esencialmente en el concepto de nulidad marcado como **PRIMERO**, número 1.-, de su escrito inicial de demanda, que resulta ilegal la resolución impugnada, ya que se encuentra basada en cuotas o tarifas que no han sido publicadas en el Periódico Oficial del Estado, ni en uno de mayor circulación en el Estado, como lo exige el artículo 101 de la Ley del Agua para el Estado de Aguascalientes.

Concepto de nulidad que es preferente su análisis por cuestión de orden y además ser el que mayor beneficio le brinda a la parte actora, puesto que es **FUNDADO**, como se verá a continuación:

De una interpretación sistemática e integral de los



artículos 3º fracción XIII, 23, 25, fracción II, 27, fracción I, 29, fracción III, 34, fracción IV y 101 de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes; 3, 6, fracción XII, y 16, fracción III, del Reglamento del Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal Denominado Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes, se obtiene que:

1. El prestador de los servicios, en este caso, la concesionaria PROACTIVA MEDIO AMBIENTE CAASA, S.A. de C.V., **aplicará para los cobros de los servicios** de agua potable, alcantarillado y saneamiento, **las cuotas y tarifas** que al respecto autorice el Consejo Directivo del organismo operador municipal denominado Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes — CCAPAMA — .

2. Cuotas y tarifas, que para su eficacia, el Director General del citado organismo operador municipal, **deberá publicar** en el **Periódico Oficial del Estado** y en uno de los **diarios de mayor circulación en la entidad**.

Luego, la concesionaria Proactiva Medio Ambiente para determinar la cantidad a pagar por parte de los usuarios, necesariamente deberá tener como base las tarifas y cuotas autorizadas y publicitadas en los términos que lo exige la norma; circunstancia que en la especie no acontece.

Afirmación que se hace, toda vez que la concesionaria demandada **no demostró** que haya efectuado las publicaciones que son exigidas dentro de los medios de comunicación indicados, respecto a las tarifas aplicadas a los meses facturados en el recibo impugnado, **los que corresponden a partir de la del mes de diciembre de dos mil dieciséis, a la del mes de agosto de dos mil diecisiete**, lo anterior ya que si bien dio contestación a la demanda entablada en su contra, sin embargo en cuanto a **las publicaciones que corresponden al PERIÓDICO**

OFICIAL DEL ESTADO, dentro del escrito de contestación de demanda, específicamente a foja *cincuenta frente y vuelta* de los autos, la concesionaria pretendió acreditar estas señalando diversas fechas de publicación de ese medio, pero las que corresponden a los meses facturados en el recibo impugnado, omitió el mes de *enero de dos mil diecisiete*; sin que se ofertaran en el escrito de contestación de demanda como una prueba formal para justificar la publicación de las tarifas valor en el medio de difusión multicitado.

Ahora bien, por lo que ve a la publicación de las tarifas respecto a los meses facturados en el recibo impugnado, en el medio de difusión correspondiente a **UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL ESTADO**, la concesionaria no acreditó su debida publicación, toda vez que si bien, ofreció como prueba, la copia certificada de la Fe de Hechos número 27,686, de fecha trece de octubre de dos mil diecisiete, del contenido de dichas copias certificadas, se advierte que la autoridad fue omisa en acompañar, para justificar la publicación de las tarifas valor en el medio de difusión multicitado, las correspondientes a los meses de *diciembre de dos mil dieciséis y febrero de dos mil diecisiete*.

De lo que se presume la *inexistencia* de las publicaciones de la totalidad de las tarifas valor de los meses facturados en el recibo impugnado dentro de los medios de difusión como así lo ordena la norma.

De todo lo asentado en párrafos anteriores, toda vez que dentro de la clasificación de los actos se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. De manera que, para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad.



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

En este caso, el acto negativo que se le atribuye a la concesionaria, versa exclusivamente en que basa su resolución en tarifas que no han sido publicadas en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en la entidad; de manera que, a fin de desvirtuar el hecho negativo que se le atribuye, estaba obligada a exhibir la publicación de todas las cuotas o tarifas que sirvieron de base para la determinación del monto a pagar por parte del usuario.

Esto, porque la negativa simple de los actos por parte del actor, la libera de la necesidad de probarlos, pues lógicamente, no es factible demostrar lo que se ha negado, de tal suerte que la carga de probar recae en la concesionaria, porque la determinación del adeudo es un hecho que se le imputa de manera directa, por ser ella la facultada para aplicar las cuotas o tarifas legalmente válidas; de lo que se sigue que, estaba obligada conforme al artículo 35, primer párrafo, *in fine*, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes, no solo a contestar ese hecho, sino a probar la razón de su respuesta, sin que así lo hubiere hecho como ya se dijo.

Da sustento a lo antes expuesto, la tesis de jurisprudencia I.7o.A. J/45, de la novena época, localizable con número de registro: 168192, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dice:

"CARGA DE LA PRUEBA EN EL JUICIO DE NULIDAD. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD CUANDO LOS DOCUMENTOS QUE CONTENGAN LAS AFIRMACIONES SOBRE LA ILEGALIDAD DE SUS ACTUACIONES OBREN EN LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS QUE AQUÉLLA CONSERVA EN CUSTODIA.

El artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de nulidad, establece

que el actor está obligado a probar los hechos constitutivos de su acción. Sin embargo, en el ámbito del derecho administrativo para un principio de excepción que obliga a la autoridad a desvirtuar, inclusive, las afirmaciones sobre la ilegalidad de sus actuaciones que no estén debidamente acreditadas mediante el acompañamiento en autos de los documentos que la contengan, cuando éstos obren en los expedientes administrativos que aquélla conserva en custodia.

También, es aplicable la tesis aislada VI.1o.230 K, de la octava época, con número de registro: 208122, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto es el siguiente:

“ACTOS NEGATIVOS, CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES LA CARGA DE LA PRUEBA DE LOS.

Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos imputados a las autoridades responsables, la carga de la prueba de que no existen esas omisiones o hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino a las responsables.”

Al no haber demostrado la concesionaria que las tarifas o cuotas que tomó como base para determinar la cantidad a pagar por parte del usuario, se hubiesen publicado en su totalidad en el periódico oficial del Estado ni en un diario de mayor circulación en la entidad, como lo exige la forma, lo que procede es declarar la **nulidad lisa y llana** del acto impugnado.

No obsta para lo anterior, lo expuesto por Proactiva Medio Ambiente en su contestación de demanda, en el sentido de que la publicación de las cuotas o tarifas no le corresponde a ella, por lo que no está obligada a demostrar la existencia de dichas publicaciones, pues de acuerdo a la Ley de Agua para el Estado, es la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes la facultada para determinar y aprobar las tarifas o cuotas que los usuarios del servicio de agua potable y alcantarillado deben de pagar, y por ende, el obligado en publicarlas.



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

Ello es así, porque la concesionaria pasa por alto que el argumento en análisis no versa en quién es la facultada para determinar y aprobar las tarifas que los usuarios de agua potable deben de pagar, y por ende, quien tiene la obligación de hacer la publicación de dichas cuotas; sino si el acto impugnado fue emitido o no con base en una tarifa que se haya publicado en términos de Ley.

Luego, si la concesionaria es quien determina la cantidad a pagar por parte del usuario, con base a las cuotas o tarifas autorizadas y publicadas por el organismo operador municipal; se concluye que, necesariamente está obligada a conocer y exhibir cuando sea requerida para ello, la publicación de las cuotas o tarifas que tomo como base para el dictado de su resolución.

SEXTO. Al ser FUNDADO el concepto de nulidad estudiado en el considerando anterior segun las consideraciones apuntadas en éste, se actualiza la causal de anulación prevista en el artículo 61, fracción II, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado, por lo que con fundamento en el diverso numeral 62, fracción II, de ese mismo cuerpo de leyes, se declara la NULIDAD LISA Y LLANA de la determinación contenida en el recibo número **70767768** emitido por la concesionaria "Proactiva Medio Ambiente CAASA", S.A. de C.V., en *trece de septiembre de dos mil diecisiete*, visible a foja *trece* de los autos.

Resolución en la que se determina y exige el pago de \$14,386.00 (CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), por 09 meses de adeudo del servicio de agua potable que se suministra en el bien inmueble ubicado en la calle ***, de esta ciudad de Aguascalientes, registrado con cuenta ***, siendo el último mes facturado agosto de dos mil diecisiete (M-08-2017).

Por las razones que se informan en este fallo, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 59, 60, 61, fracción II, y 62, fracción II, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes, se resuelve:

PRIMERO. Es procedente la acción ejercida por el actor.

SEGUNDO. Se declara la **NULIDAD LISA Y LLANA** de la determinación contenida en el recibo número **70767768** emitido por la concesionaria "Proactiva Medio Ambiente CAASA", S.A. de C.V., el *catorce de septiembre de dos mil diecisiete*, visible a foja *catorce* de los autos.

TERCERO. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE.

Así lo resolvió esta Sala Administrativa del Estado de Aguascalientes, por unanimidad de votos de los MAGISTRADOS ENRIQUE FRANCO MUÑOZ, RIGOBERTO ALONSO DELGADO y ALFONSO ROMÁN QUIROZ, siendo ponente el segundo de los nombrados, quienes conjuntamente firman ante la licenciada Juana Laura Luna Lomelí, Secretaria General de Acuerdos que autoriza y da fe.

La resolución anterior se publicó en lista de acuerdos de veintiuno de enero de dos mil diecinueve. Conste.



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

A continuación se estampa la firma de la Secretaria General de Acuerdos, quien a su vez,

C E R T I F I C A

Que las anteriores copias concuerdan fielmente con su original que obran en el expediente número *, las que se autorizan para notificar a las partes. Va en **trece páginas**, incluyendo la presente certificación, a los **dieciocho días del mes de enero de dos mil diecinueve**. Doy fe

LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS DE LA SALA ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL

LIC. JUANA LAURA DE LUNA IOMELÍ